

DEFINIR MECANISMOS CLAROS:

Diputados de Tarapacá piden transparencia sobre proyectos financiados por *royalty* minero

Obras de alumbrado público, ayuda social y contratación de personal serían algunas de las iniciativas municipales que han contado con recursos asociados al impuesto y sobre los cuales se exige mayor control en su ejecución.

JORGE MUÑOZ

Más de \$2.700 millones se han inyectado en 2026 a las comunas de la Región de Tarapacá provenientes del *royalty* minero que, por ley, debe destinarse a financiar proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida y reduzcan brechas de desigualdad en lugares que reciben las externalidades negativas de la industria.

Desde la Municipalidad de Alto Hospicio —que este año fue beneficiada con \$1.019 millones provenientes del *royalty*— señalaron que los dineros fueron invertidos en recursos humanos, ayudas sociales e insumos y equipamiento técnico para la elaboración de proyectos. Mientras que el municipio de Iquique afirmó que empleará los \$521 millones recibidos —1% del presupuesto municipal— en una reestructuración de la ciclovia y trotavía del Parque Cavancho. Y comunicaron, además, que el proyecto de adquisición e instalación de postes y luminarias públicas en la avenida Arturo Prat también fue financiado con recursos del *royalty*.

CONTROL Y TRAZABILIDAD

Entre los diputados de Tarapacá hay consenso en que se debe legislar para robustecer el seguimiento y el control de probidad en el uso de estos fondos.

La diputada independiente Ximena Naranjo indicó que se encuentra trabajando junto a su equipo jurídico "en propuestas que permitan fortalecer la trazabilidad y el control del uso de estos recursos, estableciendo mayores exigencias de rendición, publicación de gastos, seguimiento de los proyectos financiados y criterios objetivos de priorización".



Más de \$2.700 millones se han inyectado a las comunas de la región de Tarapacá provenientes del *royalty* minero en 2026.

“AL TRATARSE DE UN IMPUESTO QUE DEPENDE DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL COBRE, las autoridades deberían aprovechar los ciclos de alza para compensar los de baja mediante una planificación de mediano o largo plazo, es decir, más allá de sus periodos de gobierno”, afirma Cristián Jamett, director del Núcleo de Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial: Sociedad, Estado y Región (SER) de la Universidad Arturo Prat.

Asimismo, la parlamentaria recalcó que el *royalty* debe dejar obras visibles y soluciones tangibles, y que “la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se está gastando cada peso y los resultados”.

El diputado del Partido Nacional Libertario Álvaro Jofré, en tanto, hizo hincapié en un dato relevante: el 60% de los municipios que reciben este beneficio presentaron problemas de transparencia respecto a su empleo: “Es una debilidad estructural de control que no puede seguir normalizándose. Mi compromiso legislativo va a estar en restablecer reportes trimestrales obligatorios, exigir trazabilidad completa sobre el uso de los recursos y establecer límites claros para evitar que

estos fondos terminen diluidos en gasto administrativo, asesorías o estructuras internas que muchas veces no tienen ningún impacto visible para las comunas”, expresó.

De igual forma, el diputado independiente Carlos Carvajal dijo que se deben definir mecanismos claros y transparentes sobre los recursos del impuesto, alegando que “es fundamental que los fondos del *royalty* se utilicen para combatir ciertas brechas regionales. En materia de seguridad y recuperación de espacios públicos, por ejemplo, a través de cámaras y luminarias, invertir en el reconocimiento de nuestras rutas patrimoniales y ancestrales, además de establecer mecanismos de planificación en materia de vivienda y suelos”.

MAYOR GOBERNANZA

Para Cristián Jamett, director del Núcleo de Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial: Sociedad, Estado y Región (SER) de la Universidad Arturo Prat, un uso efectivo de los fondos provenientes del *royalty* minero podría darse con la articulación entre municipios, gobiernos regionales y actores del territorio.

“Los alcaldes, así como cualquier otra autoridad política, no son capaces por sí solos de conocer y resolver todos los problemas de una comuna. Por ello, los gobiernos locales en distintas partes del mundo han entendido que necesitan articular una gobernanza o coordinación horizontal con distintos actores”, afirmó.

Y agregó que al tratarse de un impuesto que depende del precio internacional del cobre, las autoridades deberían “aprovechar los ciclos de alza —como el actual— para compensar los que estarán a la baja, mediante una planificación de mediano o largo plazo, es decir, que las autoridades municipales piensen más allá de sus periodos de gobierno”.